



INFORME TRES

JUSTICIA PARA TODOS Y EL

CONTRATO SOCIAL EN PELIGRO



Los Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies (conquistadores de sociedades pacíficas, justas e inclusivas) reciben un generoso apoyo financiero por su trabajo en Justice for All (Justicia para todos) por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y la Fundación Charles Stewart Mott.



Este trabajo está autorizado bajo una licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) <https://creativecommons-mons.org/licenses/by/4.0/>. Conforme a la licencia Creative Commons Attribution, usted tiene la libertad de copiar, distribuir, transmitir y adaptar este trabajo, incluso para fines comerciales, siempre que se otorgue la atribución y se indiquen los cambios realizados.

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, Justicia en una pandemia - Informe tres: Justicia para todos y el contrato social en peligro (Nueva York: Center on International Cooperation, 2021). Disponible en <https://www.justice.sdg16.plus/>

Fotografías de portada: Fancycar / Shutterstock.com, Vic Josh / Shutterstock.com, Jennifer M. Mason / Shutterstock.com, Chadolfski / Shutterstock.com, Arun Sambhu Mishra / Shutterstock.com, Jorge hely veiga / Shutterstock.com

Justicia en una pandemia - Informe tres

Justicia para todos y el contrato social en peligro

Autores principales

David Steven, Miembro senior, Centro para la Cooperación Internacional

Maaïke de Langen, Líder del programa Pioneros en Justicia, Centro para la Cooperación Internacional

Sam Muller, Director ejecutivo, Instituto de la Haya para la Innovación en Justicia, HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law)

Mark Weston, Consultor, investigador, escritor independiente

Coautores

Adna Karamehic-Oates, Adrian Di Giovanni, Alisa Jimenez, Allyson Maynard-Gibson, Ariana Lippi, Beverley McLachlin, Felix Steffek, Gerald Abila, Gustavo Maurino, Harshani Dharmadasa, Juan Botero, Karina Gerlach, Kristen Hope, Kristina Simion, Leoni Cuelenaere, Liv Tørres, Maha Jweied, María Fernanda Rodríguez, Mark Beer, Michael Warren, Paul Prettitore, Pema Doornenbal, Rachel Locke, Sabrina Mahtani, Sara Hossain, Sarah Chamness Long, Sarah Papineau, Sheelagh Stewart, Swati Mehta, Themba Mahleka, Trevor Farrow, Willy Mutunga



“La ira que alimenta dos movimientos sociales recientes refleja una desilusión total con el estado de las cosas. Las mujeres de todo el mundo han pedido tiempo para abordar uno de los ejemplos más atroces de desigualdad de género: la violencia perpetrada por hombres poderosos contra mujeres que simplemente están tratando de hacer su trabajo. El movimiento contra el racismo que se ha extendido desde los Estados Unidos por todo el mundo después del asesinato de George Floyd es una señal más de que la gente ya está harta: harta de la desigualdad y de la discriminación que trata a las personas como criminales en función de su color de piel; harta del racismo estructural y de la injusticia sistemática que niegan a las personas sus derechos humanos fundamentales ”.

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

Introducción

Es probable que las repercusiones sociales y políticas de la COVID-19 se dejen sentir durante una generación o más, y las medidas que se tomen ahora pueden tener consecuencias que tendrán repercusión durante décadas en el futuro. Algunos países están comenzando a recuperarse de las crisis económica y sanitaria inmediatas provocadas por el virus. Pero si no logran involucrar a todos los sectores de la sociedad en la recuperación o, lo que es peor, si permiten que arraigue la exclusión social existente y cree nuevas rutas hacia la marginación, acumularán problemas mayores que pueden estallar en disturbios o conflictos en cualquier momento.

En Justicia para todos y el contrato social en peligro, argumentamos que si las instituciones de justicia agravan en lugar de aliviar las tensiones sociales, se desmoronará el contrato social, el acuerdo de las personas para dar su consentimiento a la autoridad estatal y seguir las reglas a cambio de seguridad, servicios públicos y la capacidad de “articular sus intereses, ejercer sus derechos y mediar en sus diferencias”.¹ Por el contrario, si los actores de la justicia verdaderamente ejercen de defensores de la justicia y la equidad, y se los ve como tales, ello puede ayudar a generar confianza y restablecer el contrato social.

Este informe es el tercero de una serie que examina el papel de los sectores de la justicia en la respuesta a la pandemia de la COVID-19.

El primer informe, *Justicia para todos y la emergencia de salud pública*, analizaba el papel de los actores de la justicia en la mitigación de los impactos inmediatos del coronavirus. Destacábamos la necesidad de proteger de la enfermedad a la fuerza laboral del ámbito de la administración de justicia mientras se encontraban formas de continuar brindando servicios de administración de justicia y de hacer cumplir las medidas de emergencia de manera justa.¹

El segundo informe, *Justicia para todos y la crisis económica*, evaluaba qué contribuciones podrían hacer los sectores de la justicia, a medida que los gobiernos y las comunidades se enfrentan con economías estancadas, niveles crecientes de pérdida de empleos y quiebra, y un aumento de la deuda y la pobreza. Para satisfacer la creciente demanda, argumentábamos que el sector de la justicia debería trabajar con socios ajenos al ámbito convencional de la justicia, como los sindicatos, las asociaciones patronales y los asesores de deuda; priorizar las soluciones no judiciales; y utilizar los sistemas de justicia de manera estratégica, colaborar con otros sectores y convertirlos en una plataforma para la reconstrucción de las economías²

La justicia es un sector crítico en la relación entre los estados, las comunidades y las personas. Los sistemas de justicia que funcionan bien pueden reforzar la confianza en las instituciones del estado y otorgarles licencia a los gobiernos para conducir la recuperación. Sin embargo, los abusos por parte de los actores del ámbito de la justicia, o su incapacidad o negligencia a la hora de proporcionarles a las personas los servicios básicos y la equidad que precisan para su vida cotidiana pueden llevar a la pérdida de cohesión social, a conflictos violentos y a una falta de confianza que imposibilitará el trabajo de los gobiernos y que podría invalidar cualquier sueño de lograr el progreso social y económico.

1-2 años

Crisis de salud pública

5-10 años

Crisis económica,
laboral y financiera

**Una generación
o más**

Desarticulación política,
social y cultural

Uno

Justicia y crisis social

Las dislocaciones sociales y políticas causadas por la pandemia de la COVID-19 ahora se están perfilando ahora con mayor claridad. La forma en que los gobiernos respondan a estas dislocaciones determinará si aprovechan la oportunidad para generar confianza y mejorar el contrato social entre el estado, las comunidades y las personas. Con demasiada frecuencia, las instituciones de justicia han sido responsables de alimentar la desconfianza y debilitar las relaciones entre el Estado y la sociedad. Pero al adoptar un enfoque de la justicia más centrado en las personas, pueden desempeñar un papel crucial en la recuperación de la pandemia, ayudando a sus sociedades a reconstruirse de una manera justa, inclusiva y sostenible.

Una necesidad urgente de justicia

Al vérselas con la pandemia de la COVID-19, los gobiernos han asignado una gran responsabilidad a los actores del ámbito de la justicia. Se ha recurrido a los sistemas de justicia, a través de sus canales formales e informales, para hacer frente a las repercusiones de la COVID-19 relacionadas con la salud, como el aumento de la violencia doméstica y las medidas de emergencia para la contención de virus.³ También han estado a la vanguardia de la respuesta a los efectos económicos de la pandemia, incluido el aumento de la deuda, los desalojos, la pérdida de empleo, las quiebras y las disputas sobre testamentos conforme aumentan las cifras de muertes.⁴ En algunos entornos, también, los actores de la justicia han enfrentado amenazas y violencia real mientras trabajan para extender la provisión de justicia de forma más amplia.

A medida que su función se ha ampliado, también lo ha hecho la visibilidad de los sectores de la justicia. En las situaciones en las que se considera que los actores de la justicia tratan a las personas de manera justa e inclusiva y ayudan a reducir las desigualdades y la marginación que han actuado como caldo de cultivo de la pandemia, ha aumentado la confianza en la equidad de la respuesta de los estados a la pandemia.⁵

Por el contrario, lo contrario ha ocurrido con frecuencia y la aplicación dura de las medidas de contención, especialmente cuando se combina con la discriminación racial u otras formas de discriminación a menudo sistémica, ha conducido de forma directa al malestar, que en algunos entornos ha devenido en violencia.⁶ La corrupción que queda impune intensifica la frustración de quienes acatan la ley.⁷ Y en aquellos lugares en los que el poder judicial han sido cómplice de los intentos por parte del gobierno de aprovecharse de la pandemia para reprimir la disidencia, posponer o influir ilegalmente en las elecciones y cerrar el espacio cívico, ello ha ayudado a acumular agravios que podrían estallar en forma de conflictos en los años venideros.⁸

El asesinato de George Floyd por parte de la policía en los Estados Unidos, la represión de la oposición política en Birmania, Bielorrusia, Colombia y Hong Kong, y las vulneraciones de los derechos humanos perpetradas con impunidad por el Escuadrón

Especial Antirrobo de Nigeria (Special Anti-Robbery Squad, SARS) son ejemplos recientes de cómo los abusos por parte de los actores del ámbito de la justicia pueden provocar protestas nacionales e incluso internacionales.⁹

“Si no hay justicia, no hay paz” fue el grito de guerra detrás de las manifestaciones de Black Lives Matter de 2020. Las injusticias cometidas por los actores del sector de la justicia contra las personas de minorías étnicas y comunidades marginadas son los síntomas más visibles del fracaso generalizado de los Estados para respetar los derechos de todos y para incluir a todos los sectores de la sociedad en los empeños por lograr objetivos económicos y sociales.

Incluso antes de que estallara la pandemia, existía una enorme necesidad insatisfecha de justicia. En algún momento, 1500 millones de personas han tenido un problema relacionado con la justicia civil, administrativa o penal que no pudieron resolver, y 253 millones de personas vivían en condiciones extremas de injusticia, sin protección legal. Al menos 4500 millones carecían de acceso a oportunidades que brinda la ley, como casarse, poseer propiedad, conseguir empleo, establecer negocios o acceder a servicios públicos.¹⁰

Las tensiones añadidas por la pandemia hacen si cabe más urgente que nunca que el sector de la justicia incremente sus capacidades para proporcionar a las personas la justicia que precisan para su vida cotidiana. En muchas de las protestas recientes, las desgracias económicas causadas por la COVID-19 fueron el detonante que encendió la mecha que hizo estallar el resentimiento ya existente. Los actores del ámbito de la justicia deben demostrar cómo van a corregir en lugar de perpetuar las injusticias y desigualdades estructurales. No solo está en juego su propia legitimidad, sino también la confianza entre las personas y los gobiernos y los vínculos que mantienen unidas a nuestras sociedades.¹¹

Los efectos sociales de la pandemia

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, quedó claro que los impactos se estaban extendiendo más allá del daño a la salud de las personas. A medida que se impusieron medidas de contención de virus en todo el mundo, la actividad económica se detuvo, lo que resultó en cierres de empresas, despidos masivos de trabajadores¹² y un aumento vertiginoso de la deuda individual y nacional.¹³ El confinamiento de las personas en sus hogares provocó un aumento de la violencia doméstica, con impacto particular en las mujeres y los niños, y redujo los recursos disponibles para sus víctimas.¹⁴ Cientos de miles de niños han quedado huérfanos a causa de la pandemia, con consecuencias a largo plazo para ellos y sus comunidades.¹⁵ Conforme se redujeron la producción y la distribución agrícolas, el aumento de los precios de los alimentos aumentó la inseguridad alimentaria y precipitó a cientos de millones de personas en la pobreza, o los sumió aún más profundamente en ella.¹⁶

Ha habido éxitos en la respuesta mundial al virus. Algunos gobiernos han logrado contener los contagios y limitar el número de muertes, a menudo imponiendo medidas draconianas de salud pública. Otros han limitado las consecuencias económicas pidiendo préstamos para apoyar a los trabajadores despedidos o a los



pequeños empresarios en situación de insolvencia, aplicando lo aprendido de los fracasos de la crisis financiera de 2008 y dirigiendo los programas de ayuda económica a los individuos y a las pequeñas empresas en lugar de a bancos.¹⁷ Las vacunas contra la COVID-19 se han desarrollado con una velocidad sin precedentes luego de un esfuerzo de investigación de colaboración global, y los países ricos han podido inmunizar a la mayor parte de su población a los pocos meses de aprobarse las vacunas.

No obstante, pocas sociedades han logrado evitar que el virus afecte con mayor gravedad a algunos grupos de población que a otros. Tanto en los países de ingresos altos como en los de ingresos bajos, las personas y las comunidades que ya padecían exclusión y discriminación se han llevado la peor parte de los efectos de la pandemia.¹⁸ Las minorías étnicas, los refugiados y otros migrantes, y las personas que viven en la pobreza, han sufrido mayores tasas de infección, mayor morbilidad y mortalidad, y pérdidas de ingresos más importantes.¹⁹

Las políticas de contención de virus también se han dejado sentir con más dureza en aquellos con menos influencia y poder sobre cómo se maneja la sociedad. A los niños y jóvenes se les ha negado el acceso a la educación y al empleo a pesar de que tienen un riesgo bajo de padecer formas graves de la enfermedad.²⁰ Las medidas de confinamiento se han dirigido con frecuencia a las zonas urbanas donde las comunidades de minorías étnicas o personas pobres constituyen una gran proporción de la población.²¹ Las nuevas reglas se han aplicado con más rigor en las zonas marginadas que en las ricas, y no es infrecuente que los poderosos con demasiada no parezcan verse afectados por las restricciones que enfrenta la sociedad en general.²²

Esta distribución desigual de los efectos está afianzando los patrones de exclusión existentes. Se estima que la COVID-19 ha aumentado el número de personas que viven en la pobreza extrema en más de 115 millones en 2020, el mayor aumento de la historia.²³ Los países de bajos ingresos están experimentando una contracción económica

significativamente mayor que las economías avanzadas.²⁴ En todo el mundo, es mucho más probable que las personas de minorías étnicas y raciales hayan experimentado inseguridad alimentaria como resultado de la pandemia.²⁵ Dado que las escuelas se han visto obligadas a cerrar y recurrir a la enseñanza en línea, la brecha digital está exacerbando las desigualdades educativas entre los niños tanto dentro de un mismo país como entre países.²⁶ Además de tener que hacer frente al aumento de la violencia de género, las mujeres se han visto más afectadas que los hombres por los impactos económicos de la crisis, que han revertido décadas de progreso en la reducción de la desigualdad de género.²⁷

El contrato social en peligro

Estas desigualdades e injusticias ya han provocado protestas. Ya en agosto de 2020, la mayoría de los países del mundo habían experimentado algún nivel de desorden público como resultado de la enfermedad o de las respuestas a ella.²⁸

En los primeros meses, estas manifestaciones se centraron en el fracaso de los gobiernos para contener la pandemia y sus impactos económicos. Sin embargo, pronto “evolucionaron hacia una continuación de los movimientos sociales que habían comenzado antes de la crisis.”²⁹ En general, el número de manifestaciones aumentó en 2020 en comparación con 2019, que en sí mismo había sido un “año particularmente fuerte” en cuanto a las protestas.³⁰

Los movimientos de protesta más grandes de los últimos años (Black Lives Matter, las protestas de EndSARS en Nigeria, el movimiento #MeToo, la Primavera Árabe), tienen sus raíces en injusticias estructurales que, después de cocer a fuego lento durante años, estallaron repentinamente en disturbios. El racismo sistémico y la discriminación contra las comunidades más pobres y marginadas dejaban a estas comunidades con pocas opciones para abordar las injusticias salvo la de salir a protestar a la calle.

La creciente intensidad de estos movimientos, en países de todas las regiones y grupos de ingresos, demuestra cómo se está desgastando el contrato social entre el estado, las comunidades y las personas. La protesta pacífica puede ser un signo de un contrato social efectivo, pero la desvinculación de los manifestantes de las instituciones estatales o las protestas que se vuelven violentas o a las que el estado responde con violencia son un reflejo de que el contrato social está en peligro.³¹

La COVID-19 es el mayor efecto social y financiero al que muchos países han enfrentado en una generación o más, y el enorme costo en muertes y trastornos económicos ha tensado la relación entre estados, comunidades y personas. Se implementaron medidas contundentes para frenar la propagación del virus, a menudo en condiciones de gran incertidumbre, lo que tuvo efectos negativos graves e inmediatos en la vida cotidiana de las personas. Los servicios gubernamentales se vieron inundados de demandas y a la vez gravemente obstaculizados en su capacidad para responder a las necesidades de la población.

La tensión se ha agudizado (y ha aumentado el riesgo para el contrato social) por la corrupción, el silenciamiento y el hostigamiento a los críticos y la oposición política, y otros abusos



de poder por parte de los actores estatales.³² Un político tras otro desobedeció las reglas que ellos mismos habían impuesto.³³ El amiguismo en la distribución de paquetes de apoyo financiero o contratos para equipos de protección personal ha ahondado la desconfianza en la voluntad de los estados de cumplir con el acuerdo con sus ciudadanos.³⁴ En algunos lugares, la aplicación de las regulaciones contra la pandemia fue innecesariamente torpe, y la agresividad de la respuesta policial a las protestas en su mayoría pacíficas no hicieron sino avivar el fuego.³⁵

Si se deja que ahonden los agravios legítimos y se responde a las protestas pacíficas con represión, el contrato social se resquebrajará. En Colombia, las protestas que comenzaron en respuesta a las reformas fiscales, que el gobierno aducía que eran necesarias para financiar la respuesta a la COVID-19, han ampliado sus demandas, ya que la brutalidad perpetrada por las fuerzas de seguridad ha causado la muerte de decenas de manifestantes.³⁶ Si bien un contrato social sólido depende de muchos factores, incluida una economía justa, reglas y regulaciones efectivas y la oportunidad de que las personas influyan en la toma de decisiones, maltratar o descuidar a grandes sectores de la sociedad es una forma segura de debilitarlo.

La ruptura del contrato social tiene un costo gravísimo: cuando los agravios son tan agudos que las manifestaciones desembocan en la violencia, no solo aumenta la carga sobre los sistemas de salud ya sobrecargados, sino que también se restringe la reactivación de la actividad social y económica a medida que se alivia el confinamiento.³⁷ Se estima que las protestas de #EndSARS contra la brutalidad policial en Nigeria, por ejemplo, le costaron al país 1800 millones de dólares en solo 12 días en octubre de 2020.³⁸ El costo anual de 13,6 billones USD de contener la violencia en todo el mundo equivale al 13 % del PIB mundial, o 1876 USD por persona por año.³⁹

Para que las sociedades se recuperen de crisis como la pandemia de la COVID-19, es esencial un contrato social sólido basado en la confianza. Sin el consentimiento explícito o tácito de la mayoría, será imposible que los estados persuadan a las personas de los beneficios de llevar mascarilla o vacunarse, por ejemplo, o que puedan sentar las bases para la recuperación económica a raíz de la crisis. Reducir los riesgos tan dañinos para el desarrollo social y económico que acarrear los conflictos y la violencia requiere abordar los impulsores de la desconfianza en las instituciones estatales y hacer que esas instituciones sean más inclusivas, receptivas y responsables rindan cuentas con claridad ante la ciudadanía.⁴⁰

Poner a las personas en el centro de la justicia

La demanda de justicia va en aumento. Personas de todo el mundo están pidiendo justicia social, justicia racial, justicia de género, justicia climática, justicia económica, justicia para los refugiados y otros migrantes, y el fin de la violencia, la corrupción y la discriminación sistémica.

Los últimos años han visto el surgimiento de un creciente movimiento por la justicia que tiene por centro la equidad de las personas. El Grupo de Trabajo sobre Justicia reunió a líderes de la justicia de todo el mundo para abogar por la justicia centrada en las personas.⁴¹ Los principios de la justicia centrada en las personas fueron respaldados en la Declaración de La Haya sobre Igualdad de Acceso a la Justicia para Todos para 2030, así como en la Declaración de Buenos Aires y el Plan de Acción Conjunta adoptados por los Ministros del G7+.

En abril de 2021, los ministros de 16 países acordaron formar la Coalición de Acción por la Justicia, que servirá como plataforma para compartir experiencias y conocimientos sobre la administración de justicia centrada en las personas y trabajará para movilizar apoyo financiero y político para hacer viable una justicia para todos.⁴² La OCDE continúa su trabajo de establecimiento de normas sobre justicia centrada en las personas en el contexto de su Mesa Redonda de Política Global sobre Igualdad de Acceso a la Justicia. IDLO ha hecho de la justicia centrada en las personas el centro de su misión y nuevo plan estratégico y la Alianza para el Gobierno Abierto ha establecido una Coalición por la Justicia para promover el acceso a la justicia a través de la acción nacional.⁴³

La justicia tiene el potencial de actuar como el sistema inmunitario de una sociedad, abordando los problemas antes de que proliferen y previniendo la aparición de nuevos problemas que puedan dañar el tejido social. Al reorientar los sistemas de justicia para que se centren en las personas y trabajen fuera de los sistemas e instituciones formales, podemos resolver los problemas que han puesto en peligro la cohesión social, prevenir disputas que aumentarán el descontento a largo plazo y utilizar la justicia como plataforma para una recuperación equitativa y sostenible.⁴⁴

En la siguiente sección de este informe, analizamos cinco formas en las que los actores de la justicia, tanto de los cauces formales como fuera de los cauces formales, pueden desempeñar su papel en la restauración del contrato social y el aumento de la capacidad de las sociedades para resistir y recuperarse de esta y futuras crisis.

Dos

La justicia y el fortalecimiento del contrato social

Para fortalecer el contrato social, los actores del ámbito de la justicia deben comprender los agravios y evitar perpetrar abusos que socaven el contrato social. Pueden aumentar la justicia resolviendo disputas y abordando agravios, atajando las injusticias estructurales y haciendo que la recuperación de la pandemia sea más sostenible al proporcionar una plataforma para la renovación económica y social.

Entender los agravios

Las protestas, los disturbios y la violencia no surgen de la nada; son previsibles si se sabe dónde buscar. Cuando los actores de los ámbitos de la justicia, tanto formales como informales, son imparciales e independientes y se preocupan por las necesidades de las personas, sus observaciones pueden servir como barómetro de las tensiones sociales.

Los líderes de la justicia y otros líderes políticos deben hacer uso del conocimiento local de los asistentes legales, los oficiales de apoyo familiar, los profesionales del empoderamiento legal y la policía. Estos actores ven y escuchan dónde ocurren los problemas, cuáles son los más importantes para las personas y qué pueden enfrentar a las comunidades entre sí. Los conocimientos que obtienen a través de su trabajo pueden indicar dónde está bajo presión el contrato social. Este entendimiento es fundamental para evitar que más sectores de la sociedad queden alienados a raíz de la pandemia.

Es igualmente importante recopilar y analizar datos sobre las necesidades de justicia de las personas y su experiencia en los procesos judiciales. Los diferentes niveles de los sistemas de justicia pueden utilizar datos de casos y agravios individuales para formar una imagen más amplia de las quejas clave, señalar dónde se puede estar gestando un conflicto e intervenir o brindar apoyo para desactivarlo.

Las instituciones que son reflejo, tanto demográfica como culturalmente, de las personas a las que se supone que deben servir son más accesibles y propensas a empatizar con los problemas de las personas, y es más probable que se les perdone, en lugar de atacarlas, cuando se cometen errores.⁴⁶ La constitución de Kenia de 2010, por ejemplo, se compromete a una representación justa en el poder judicial de mujeres y hombres y de todos los grupos étnicos del país.⁴⁷ En Georgia, una nueva patrulla policial que acercó a la policía a las comunidades y los alentó a trabajar con los grupos asesores de ciudadanos para escuchar los problemas de la gente generó una mayor confianza en la policía y una mayor disposición de la gente a denunciar incidentes de corrupción.⁴⁸

Después de descubrir que el 25% de las personas pensaban que buscar ayuda legal era una pérdida de tiempo o no sabían dónde buscarla, el Centro de Estadística de Sudáfrica agregó un módulo de justicia civil a sus encuestas regulares. Este módulo tiene por objeto delimitar cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrentan las personas con respecto a la administración de justicia y averiguar cómo se las arreglaron para resolverlos. Los resultados se utilizan para dar forma a las políticas de la agencia de asistencia legal y las del gobierno en su conjunto.⁴⁵

En México, la ONG Mujeres en Frecuencia utiliza programas de radio para transmitir mensajes que apoyan el acceso a la justicia para mujeres, víctimas de violencia de género y otras comunidades vulnerables. Los programas han llegado a millones de personas y son seguidos por voluntarios que trabajan en comunidades indígenas y remotas.⁴⁹



No hacer daño

Los abusos de los actores de la justicia se encuentran entre las formas más efectivas de destruir el contrato social. Están asociados con un mayor riesgo e intensidad de los conflictos y son un importante impulsor del extremismo violento.⁵⁰

Tomar medidas en tres áreas puede ayudar a frenar los abusos. Primero, es vital llevar ante la justicia a los perpetradores de los abusos para que los sistemas judiciales demuestren que su compromiso con la reforma es serio. Los manifestantes del levantamiento de Sudán de 2019 todavía estaban esperando justicia dos años después de que 200 de ellos fueran asesinados a tiros por las fuerzas de seguridad en una sentada en Jartum. La frustración alimentada por el retraso de la investigación llevó a más protestas generalizadas en 2021, interrumpiendo la actividad económica y obstaculizando la respuesta del país a la pandemia de la COVID-19.⁵¹ Hacer posible que se pueda someter a las instituciones y a los actores del ámbito de la justicia a un escrutinio independiente, crear mecanismos de supervisión y denuncia, tomar en serio las necesidades de las víctimas y colaborar con los grupos comunitarios puede ayudar a garantizar que se aborden y prevengan los abusos.

En segundo lugar, es necesario abordar los problemas sistémicos de discriminación racial y de género en y por parte de los actores de la justicia, junto con su incapacidad para brindar servicios efectivos para quienes tienen ingresos más bajos. Esto requiere políticas de reclutamiento y promoción no discriminatorias (incluida la investigación de los candidatos reales y potenciales para detectar actitudes discriminatorias, y sistemas seguros para que los trabajadores del sector judicial denuncien la discriminación); alcance más concertado en comunidades marginadas; y capacitación para sensibilizar a los actores de la justicia sobre el daño que causan el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación.

En tercer lugar, se deben reformar los procedimientos de justicia de confrontación y los procesos legales que contribuyen a la escalada de conflictos.⁵² Los mecanismos alternativos de resolución de disputas, los esquemas de mediación y defensoría del pueblo pueden ser más efectivos que los tribunales para resolver problemas de justicia y restaurar relaciones subyacentes. Las sentencias alternativas pueden mantener a las personas fuera de la cárcel y limitar el daño a su vida y la de sus familias. Las víctimas de los conflictos con frecuencia prefieren la reconciliación u otras reparaciones al castigo draconiano de los perpetradores, y la reconciliación y la reintegración de los perpetradores de delitos en las comunidades pueden promover la estabilidad y reducir los riesgos de más violencia.⁵³ El estado puede respaldar y proporcionar marcos confiables para estos mecanismos, con disposiciones que protejan a las partes más vulnerables de las disputas para que no se vean obligadas a aceptar soluciones injustas.⁵⁴

Resolver disputas y abordar agravios

La resolución pacífica de disputas y conflictos es el propósito de cualquier sistema de justicia y los líderes judiciales deben asegurarse de cumplir con ese objetivo.

Al aumentar su capacidad de respuesta, relevancia y rapidez, los actores de la justicia tienen el potencial de resolver disputas antes de que se agraven y de evitar que se acumulen agravios.⁵⁷ Con 1500 millones de problemas de justicia civil, administrativa o penal sin resolver, los proveedores de servicios de justicia deben demostrar que pueden llegar a más solicitantes de justicia y garantizar la prestación de servicios durante la recuperación de la pandemia.

Las sociedades resilientes gestionan los conflictos de forma constructiva e innovan ante una crisis. Esto a menudo significa llevar la justicia a las comunidades que más la necesitan. Los asistentes legales, por ejemplo, viven con la población local y la comprenden, incluidas las poblaciones remotas y marginadas, y ayudan a la gente a conocer, utilizar y dar forma a la ley. Ellos y otros defensores de la justicia pueden apoyar a las comunidades y actuar como intermediarios confiables en disputas con poderosos intereses del sector privado y estatal, empoderando a las personas para usar la ley para protegerse de la explotación.⁵⁸

En Somalia, la Administración del Distrito de Baidoa suspendió los desalojos durante la pandemia de la COVID-19, lo que redujo la posibilidad de que aumentara el resentimiento entre las poblaciones vulnerables.

En Uganda, donde se prohibieron los desalojos durante los cierres, los registros de la propiedad se cerraron para garantizar que no se pudieran realizar transacciones.⁵⁵

En el estado de Nueva York, luego de una campaña de organizaciones de base, incluida Bronx Freedom Fund, se eliminaron la fianza en efectivo y la prisión preventiva en 2019 para todos los cargos, excepto los más graves. La reforma alivia los agravios, además de ahorrarle costos al Estado.⁵⁶



La tecnología está abriendo formas nuevas y de menor costo de resolver disputas. Los movimientos sociales han encontrado espacios seguros en línea donde no existían en el mundo fuera de línea.⁵⁹ Las plataformas en línea brindan a las personas las herramientas para realizar contratos legalmente vinculantes a bajo costo,⁶⁰ acceder a información que los protege de la explotación,⁶¹ asesorar y mediar en disputas familiares,⁶² o hacer testamentos sin tener que pagar a un abogado. Se hace necesario un entorno regulatorio mejorado y más flexible que impulse en vez de ahogar la innovación, haciendo así posible que un espectro más amplio de proveedores de servicios puedan participar en la administración de justicia a un precio más bajo para las personas.⁶³ Sin embargo, para que la tecnología no contribuya a aumentar la desigualdad, se necesita intensificar los esfuerzos para llegar a quienes actualmente no tienen acceso a los servicios en línea.

Los enfoques para reducir los agravios y prevenir la violencia funcionan mejor cuando son multisectoriales, incorporando actores de diferentes partes de los ámbitos de la justicia, de la sanidad, de las finanzas y otros ministerios, y de los sectores privado y no gubernamental. Las ventanillas únicas como las *Casas de Justicia* de América Latina, fpor ejemplo, brindan un servicio integral al reunir a abogados, psicólogos, trabajadores sociales y policías bajo un mismo techo. Su principio rector es que las personas con problemas con la justicia a menudo enfrentan problemas en otras áreas al mismo tiempo, y atender estos problemas en una etapa temprana puede ayudar a prevenir que vayan en aumento.⁶⁴

El Palacio de Justicia de Puertas Múltiples en Lagos, Nigeria, utiliza la mediación para cortar las disputas en una fase temprana. El tiempo que se tarda en resolver disputas es menos de una décima parte del tiempo que se tarda en los tribunales nigerianos, y la naturaleza menos conflictiva del método significa que es menos probable que los conflictos se agraven.⁶⁵

Los comités de paz locales que operaron en Sudáfrica entre 1991 y 1994 reunieron a funcionarios del gobierno local, la policía, autoridades tradicionales, líderes religiosos, partidos políticos de la oposición, representantes empresariales y otros grupos de la sociedad civil para abordar la creciente violencia en el país y los desafíos en sus propias comunidades. Se descubrió que reforzaron el diálogo local y los procesos de resolución de problemas, previnieron muchos eventos violentos y salvaron vidas en algunas de las partes más violentas del país durante su transición a la democracia.⁶⁶



Abordar las injusticias estructurales

Los actores del ámbito de la justicia tienen un papel clave que desempeñar a la hora de abordar las injusticias estructurales, tanto reformando sus propias prácticas como empoderando a las personas y comunidades para corregir las desigualdades a largo plazo. Las inversiones en el sector de la justicia se dirigen con demasiada frecuencia a las prisiones, los tribunales y la policía. Una comunidad sana tiene menos necesidad de mecanismos punitivos porque tiene altos niveles de empleo y capital social y bajos niveles de desigualdad.

Se necesita un sistema de recopilación y análisis de datos riguroso y centrado en las personas para comprender las necesidades de quienes enfrentan las mayores injusticias estructurales. Las personas que históricamente han sido discriminadas por motivos como su raza, etnia, identificación de género, religión, migración o condición de refugiado o pobreza tienen más probabilidades de ser encarceladas, registradas, multadas o asesinadas por la policía, o de perder la vida civil en casos de justicia sin causa justificada.⁶⁷ También es menos probable que estén empleados en el sector de la justicia o que ocupen puestos de responsabilidad dentro de él. Identificar estas inequidades es un primer paso importante para corregirlas.

Es prioritario llegar a grupos que hasta ahora han sido desatendidos o excluidos. Se necesitan medidas para garantizar una representación más sólida en la fuerza laboral de los cuerpos de la justicia de las personas de comunidades que experimentan injusticias estructurales, y para proporcionar a los grupos marginados avenidas por las que se puedan abrir paso de modo significativo hacia la justicia a través de sistemas en los que confían. Ubicar servicios de justicia en comunidades remotas o marginadas puede mejorar el acceso a la justicia. La policía comunitaria tiene como objetivo establecer vínculos con los líderes comunitarios y los voluntarios locales para que la policía sea vista como un socio en la mejora de los niveles de vida.⁶⁸ Para los grupos que han sufrido la peor discriminación, será necesario realizar esfuerzos concertados de reconciliación, permitiendo que los actores de la justicia y los miembros de la comunidad expresen sus quejas y aborden los daños pasados y presentes, y desarrollen nuevas formas de trabajar juntos.⁶⁹

Alaska Legal Services ayuda a más de 170 comunidades de Alaska de bajos ingresos cada año a resolver sus problemas legales a través de asistencia gratuita en persona, en línea y por teléfono. Nueve de cada diez de las comunidades no están en el sistema de carreteras. La organización tiene como objetivo proporcionar una "vacuna legal" para las personas, ayudándolas a comprender y hacer valer sus derechos para que sea menos probable que se produzcan violaciones de derechos.⁷⁰

No es solo el sector de la justicia el que discrimina y excluye. La desigualdad se agudiza por las políticas injustas de vivienda o con respecto a los desalojos, por ejemplo, o por el acceso desigual a la atención médica que ha sido tan evidente durante la pandemia de la COVID-19. Los actores del ámbito de la justicia pueden trabajar con otros sectores para garantizar el acceso a la atención médica, los pagos de la seguridad social y otros servicios, y pueden ayudar a los excluidos a buscar reparación. Las organizaciones de empoderamiento legal también tienen un papel importante al trabajar con comunidades marginadas para identificar y crear conciencia sobre las injusticias estructurales y para usar y dar forma a las leyes para proteger sus derechos.

Otros sectores, a su vez, pueden contribuir a remediar las injusticias estructurales que han sido exacerbadas por el sector de la justicia. Se ha demostrado que los programas de empleabilidad, artes y deportes para jóvenes reducen la delincuencia y la violencia en las zonas urbanas deprimidas. Los trabajadores sociales, los trabajadores de salud mental y los consejeros pueden ayudar a que las personas de los grupos excluidos no vayan a la cárcel. Los planes de rehabilitación de drogadictos son más eficaces que las largas penas de prisión para prevenir la reincidencia y promover la reintegración pacífica de los delincuentes en las comunidades.⁷¹

Acelerar la recuperación

El papel del sector de la justicia va más allá de apagar incendios. Los actores del ámbito de la justicia pueden proporcionar una plataforma para la renovación económica y social a medida que las sociedades emergen de la pandemia.

Durante la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países han implementado nuevos programas de protección social y muchos de estos han llegado a comunidades que nunca antes habían sido incluidas.⁷³ Para que estos programas sean eficaces en la reducción de la marginación a largo plazo, las personas necesitan derechos de entrada: identidad legal, documentos relacionados con el trabajo o de residencia sin los cuales no podrán participar plenamente en la recuperación de la crisis.⁷⁴ Los países que ya contaban con sistemas de este tipo antes de la pandemia estuvieron mucho mejor situados para actuar rápidamente y responder a ella con intervenciones sanitarias y económicas.⁷⁵

En todo el mundo, 1100 millones de personas carecen de identidad legal.⁷⁶ Sin esta herramienta básica de participación en la sociedad, es más difícil acceder a la educación, la justicia y otros servicios públicos, registrar una empresa o acceder a un empleo, o comprar una propiedad. La ausencia de documentación básica también deja a las personas más vulnerables al abuso y la explotación por parte de empleadores y actores estatales. Los esfuerzos para cerrar estas brechas pueden ser asistidos por tecnologías biométricas y de otro tipo, como las que ayudaron a Pakistán a registrar a 90 millones de personas en una década.⁷⁷ Siempre que vayan acompañadas de rigurosas salvaguardas contra el uso indebido de datos personales, estas tecnologías son un mecanismo rentable para promover la inclusión.⁷⁸ Los procedimientos de quejas que

Durante la pandemia de COVID-19, Bangladesh desarrolló un sistema de tribunales virtuales y aplicaciones electrónicas de fianza para ayudar a reducir el hacinamiento en las cárceles. En un período de diez días durante el cierre del país, el sistema judicial atendió 33.000 solicitudes de fianza y a 21.000 personas en prisión preventiva fueron puestas en libertad bajo fianza. La población carcelaria se redujo en un tercio en cinco meses.⁷²

sean accesibles son fundamentales para ayudar a garantizar que la implementación sea justa y que cualquier persona no incluida tenga un lugar al que acudir en busca de ayuda.⁷⁹

Hay margen para que los actores de la justicia ayuden a crear mercados laborales que promuevan oportunidades para todos. Los 2100 millones de personas en todo el mundo que trabajan en el sector informal, y los miles de millones en las generaciones futuras que inevitablemente los seguirán, se beneficiarían de la protección contra el abuso por parte de las autoridades y los enfoques coercitivos para alentarlos a formalizarse. La obtención de licencias y permisos podría facilitarse como parte de un viaje incremental hacia la participación plena,⁸⁰ mientras que la sindicalización puede ayudar a los trabajadores informales a defender sus derechos, Cómo regular el sector informal de manera efectiva es una pregunta sin resolver que los actores de la justicia pueden ayudar a responder; las comisiones nacionales sobre el futuro del trabajo, por ejemplo, pueden incorporar una multiplicidad de actores para considerar enfoques a largo plazo del problema. Cómo regular el sector informal de manera efectiva es una pregunta sin resolver que los actores de la justicia pueden ayudar a responder; las comisiones nacionales sobre el futuro del trabajo, por ejemplo, pueden incorporar una multiplicidad de actores para considerar enfoques a largo plazo del problema.

Dos mil millones de personas en todo el mundo carecen de pruebas de propiedad de tierras o de vivienda. Esto los deja en riesgo de explotación o maltrato por parte de propietarios, vecinos o gobiernos, y también hace que sea más difícil pedir dinero prestado para establecer o expandir negocios.⁸¹ Renovar los derechos de propiedad sobre la tierra puede tener un impacto significativo sobre el crecimiento económico. Dado que quienes tienen más probabilidades de carecer de pruebas de posesión legal suelen ser los más marginados, incluidas las mujeres y las comunidades indígenas,⁸² ello puede ayudar a renovar el contrato social y a prevenir futuros disturbios.⁸³ Aquí, también, para cualquier proceso de formalización se necesita un acceso garantizado a la justicia que garantice la equidad y equidad en su implementación.⁸⁴

Abordar la corrupción es esencial para que todos los grupos participen de manera justa en la recuperación. Permitir que proliferen la corrupción puede socavar el progreso en todas las áreas y acumular problemas para el gobierno que tardarán años en resolverse. Se necesitan sistemas de justicia para garantizar que los paquetes de estímulo económico se distribuyan de manera justa en lugar de apropiarse por quienes están bien conectados. Los organismos de supervisión, como las agencias anticorrupción, las instituciones de auditoría y los institutos de defensa del pueblo necesitan fondos suficientes para monitorear y exponer los abusos, así como la independencia para hacer que los poderosos rindan cuentas.⁸⁶ Los denunciantes, periodistas y otras personas que se juegan el tipo por descubrir la corrupción y enfrentarse a actores poderosos deben ser protegidos y recompensados, en lugar de acosarlos o someterlos a la violencia.⁸⁷

El programa nacional de registro de tenencia de la tierra basado en imágenes lanzado por el gobierno de Ruanda en 2010 entregó 6,7 millones de nuevos títulos de propiedad en tres años a un costo de 5 USD por registro. Se descubrió que el programa había mejorado considerablemente la seguridad percibida de la tenencia de la tierra.⁸⁵

El gobierno de Ucrania ha puesto a disposición en línea los detalles de los contratos públicos y ha otorgado a las personas el poder de denunciar infracciones. La medida ha llevado a un aumento del 50 % en el número de nuevas empresas que licitan por contratos.⁸⁸

¿La vacuna de la justicia?

Los sistemas de justicia, tanto formales como informales, necesitan una inversión mayor, no reducida, para poder desempeñar un papel pleno en la recuperación de la pandemia. Pero la inversión también debe ser más inteligente y apuntar a mecanismos menos conflictivos que han demostrado prevenir y reducir los conflictos. Al resolver más problemas de manera más justa, empoderar a los grupos marginados para que participen plena y equitativamente en sus comunidades y economías, y trabajar con partes interesadas de otros sectores y otros países para desarrollar soluciones innovadoras a la injusticia, los líderes de la justicia pueden ayudar a reforzar los lazos que mantienen unidas a las sociedades.

Lo aprendido de crisis anteriores

Un estudio de varios países en los años posteriores a la crisis financiera de 2008 encontró que las políticas de austeridad impuestas por muchos países, que recortaron los servicios públicos y adelgazaron la fuerza laboral y los salarios del sector público al tiempo que aumentaban los impuestos, habían aumentado considerablemente la polarización y debilitado el contrato social.⁸⁹

Muchos gobiernos parecen haber aprendido la lección y han hecho esfuerzos para distribuir las pérdidas causadas por la pandemia de la COVID-19 de manera más justa. Uno de cada cuatro trabajadores en los países de la OCDE mantuvo sus puestos de trabajo como resultado de esquemas de retención laboral reforzados por el apoyo gubernamental a los empleadores, con diez veces más trabajadores apoyados que después de 2008. Numerosas pequeñas empresas y trabajadores que perdieron sus trabajos también recibieron una ayuda significativa.⁹⁰

En la mayoría de los países del mundo, se dedican al sector de la justicia menos recursos de los que este necesitaría. Además, las inversiones, a menudo, no se utilizan para promover con eficacia la justicia, o están financiando la injusticia. En muchos países, los programas de austeridad de los últimos años han afectado duramente a los sectores de la justicia, con recortes a la asistencia jurídica y otras partes del sector que han reducido drásticamente el acceso a la justicia.⁹¹ Las reducciones en la ayuda exterior por parte de países como el Reino Unido, justificadas por los gobiernos como necesarias para pagar los daños causados por la COVID-19, han puesto en peligro aún más el acceso a la justicia (y por lo tanto las perspectivas de desarrollo) en las regiones más pobres del mundo.⁹²

Para que el sector de la justicia desempeñe su papel en la recuperación de la pandemia y en la renovación del contrato social, será fundamental que los gobiernos inviertan en estrategias más inteligentes para resolver y prevenir los problemas de justicia y desviar los fondos de los enfoques represivos. Los costos de una ruptura del contrato social reducirían a la insignificancia cualquier ahorro logrado por aplicar nuevos recortes a la justicia, y dado que el impacto de los recortes presupuestarios recae más fuertemente en aquellos que ya están en desventaja, es probable que la reducción de la provisión de justicia aumente dichos riesgos.⁹³

Los sistemas de justicia deben ponerse al día

Las instituciones de justicia tienen que ponerse a la altura. Esto requerirá que los sistemas de justicia se recalibren y pongan el foco en las personas y sus necesidades. Los procedimientos deben volverse menos antagonizadores, menos formalistas, más inclusivos y más eficientes.

La justicia es demasiado importante y tiene repercusiones demasiado amplias como para dejar que el sector actúe solo, y el trabajo multisectorial puede resultar transformador. Todas las partes del ámbito de la justicia pueden beneficiarse del desarrollo de relaciones de asociación y del establecimiento de redes relacionales con quienes proporcionan servicios sociales, programas de empleo, atención sanitaria, educación y protección medioambiental, así como con proveedores de justicia no tradicionales, lo que incluye servicios de asesoría, asistentes jurídicos, organizaciones de empoderamiento legal, sindicatos, organizaciones feministas, líderes religiosos y comunitarios y empresas tecnológicas. Tales asociaciones pueden brindar soluciones más integrales para resolver los problemas relacionados con la justicia que tienen las personas, así como para abordar las causas de raíz que hacen posible que los problemas relacionados con la justicia surjan y se multipliquen.

La amenaza al contrato social no se limita a las fronteras nacionales. La Primavera Árabe, Black Lives Matter y los movimientos medioambientales como Fridays for Future y Extinction Rebellion y las se extendieron rápidamente por todo el mundo. Para responder a las demandas de las personas, los líderes del ámbito de la justicia también deben trabajar a nivel transnacional, uniéndose con contrapartes regionales y globales, en la justicia y otros sectores, para considerar cómo reconstruir el contrato social. Los foros internacionales pueden ayudar a los líderes del ámbito de la justicia a compartir buenas prácticas, aprender de los demás, hacer que todos rindan cuentas, forjar



movimientos que eleven el perfil de la justicia a nivel nacional y a nivel mundial, y buscar apoyo para sus esfuerzos por aumentar el acceso a la justicia centrada en las personas.

La justicia es un sector decisivo cuando se trata del contrato social. Los actores del ámbito de la justicia pueden seguir siendo parte de la enfermedad o pueden convertirse en parte de la cura. Los sistemas de justicia tienen el potencial de inocular a las sociedades contra la violencia y los conflictos, pero solamente si extienden su rango de acción y atienden de manera equitativa las necesidades de todas las personas y comunidades. Los sistemas de justicia llevan demasiado tiempo siendo mecanismos perpetuadores de la exclusión y de la discriminación de quienes están fuera de la corriente principal de la sociedad y afianzando su pobreza, inseguridad y resentimiento. A raíz de la pandemia, es más urgente que nunca que cambien el rumbo y garanticen la justicia para todos.

La Coalición de Acción por la Justicia

El 14 de abril de 2021, 16 ministros se unieron para unirse en un llamado a poner a las personas en el centro de la justicia. La reunión fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, la secretaría del G7+, y las organizaciones The Elders y Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies.

En su carta conjunta al Secretario General de Naciones Unidas, los ministros asistentes coincidieron en que es necesario repensar el contrato social y los fundamentos de nuestras sociedades. Al adoptar la justicia centrada en las personas, argumentaron, podemos reducir la desigualdad y la exclusión, reducir todas las formas de violencia, revivir el contrato social y reconstruir la confianza.

depara volver a imaginar e contrato social y poner a las personas en el centro de la justicia, los ministros asistentes hicieron hincapié en la importancia de los principios de la justicia centrada en las personas:

1. Situar a las personas y sus necesidades de justicia en el centro de los sistemas judiciales
2. Resolver problemas de justicia
3. Mejorar los recorridos a través de la justicia
4. Usar la justicia para la reconciliación y la prevención
5. Empoderar a las personas para que accedan a servicios y oportunidades.

La carta de los ministros también explicaba cómo los países se están comprometiendo a tomar medidas y trabajar juntos de manera más estrecha. Anunciaron la formación de la Coalición de Acción por la Justicia, que promoverá la justicia centrada en las personas a nivel nacional e internacional, movilizará apoyo político y financiero para apoyar que la justicia sea para todos, influirá en las estrategias y prioridades internacionales y establecerá una agenda de investigación común para la justicia centrada en las personas.

Notas finales

- 1 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies. "Justice for All and the Public Health Emergency." *New York University Center on International Cooperation*, 2020. <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 2 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies. "Justice for All and the Economic Crisis." *Center on International Cooperation*, 2020. <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 3 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies. "Justice for All and the Public Health Emergency." *Center on International Cooperation*, 2020. <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 4 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies. "Justice for All and the Economic Crisis." *Center on International Cooperation*, 2020. <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 5 See, for example: Guardian. "Spanish Police Sing to Families in Lockdown in Mallorca." 23 March 2020. <https://www.theguardian.com/world/video/2020/mar/23/spanish-police-sing-to-families-in-lockdown-in-mallorca-video>; The Local. "Police to bring elderly Italians their pensions during coronavirus crisis," April 6, 2020: <https://www.thelocal.it/20200406/police-to-bring-elderly-italians-their-pensions-during-coronavirus-crisis>
- 6 Aljazeera. "Colombia used Excessive Force against Protesters: IACHR." July 7, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/7/colombia-used-excessive-force-against-protesters-iachr>
- 7 Murtin, F., et al. "Trust and its determinants: Evidence from the Trustlab experiment", *OECD Statistics Working Papers*, No. 2018/02, OECD Publishing, Paris. 2018. <https://doi.org/10.1787/869ef2ec-en>; Center for International Cooperation. "Restoring Civic Trust in the Post-Pandemic Era. April 2021. https://cic.nyu.edu/sites/default/files/restoring_civic_trust_in_the_post-pandemic_era_april_2021.pdf
- 8 Roudabe K, "How the Coronavirus Crisis is Silencing Dissent and Sparking Repression", July 20, 2020. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2020/07/21/how-the-coronavirus-crisis-is-silencing-dissent-and-sparking-repression/>
- 9 ACLED, "Lessons from the #EndSARS Movement in Nigeria", February 9, 2021; <https://reliefweb.int/report/nigeria/lessons-endsars-movement-nigeria>
- 10 Task Force on Justice. "Justice for All – Final Report." *Center on International Cooperation*, 2019, <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 11 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies. "Joint Letter to the UN Secretary General." April 2021, www.justice.sdg16.plus/ministerial.
- 12 Kulkarni, Mahesh. "Pandemic Impact: Coronavirus May Swallow One in 10 Jobs in India." *Deccan Herald*, 28 Apr. 2020, www.deccanherald.com/business/pandemic-impact-coronavirus-may-swallow-one-in-10-jobs-in-india-831211.html.
- 13 Citizens Advice, "Millions facing financial cliff edge when coronavirus protections end," *Citizens Advice*, May 1, 2020. <https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-citizens-advice-works/media/press-releases/millions-facing-financial-cliffedge-when-coronavirus-protections-end2/>; Cheng, Evelyn "China's cash-strapped poor take on more debt as coronavirus hits job prospects," *CNBC*, April 23, 2020: <https://www.cnn.com/2020/04/23/chinas-cash-strapped-poor-need-more-debt-as-coronavirus-hits-jobs.html>.
- 14 Feder, Gene. "Domestic Violence during the Pandemic." *The BMJ*, 17 Mar. 2021, www.bmj.com/content/372/bmj.n722.; UNODC, "Justice and Prison Reform", 23 March 2021, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Assessment_COVID-19_and_CJS_responses_to_GBVAW_23Mar2021.pdf
- 15 Clarence, Vikas Pandey Andrew. "Coronavirus: The Indian Children Orphaned by Covid-19." *BBC News*, 31 May 2021, www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-57264629.
- 16 "Covid-19 and Food Security: What You Need to Know." *Center for Strategic and International Studies*, 2020, www.csis.org/programs/global-food-security-program/covid-19-and-food-security/what-you-need-to-know; World Bank. "COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021." *World Bank*, 7 Oct. 2020, www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021.
- 17 World Economic Forum. "The COVID-19 Crisis Has Reset and Revitalized the Social Contract. For How Long?" 13 January 2021, www.weforum.org/agenda/2021/01/the-covid-19-crisis-has-revitalized-the-social-contract-for-how-long; Ortiz, I., Cummins M, Capaldo J, and Karunanethy K. The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries. ESS Working Paper No. 53. *International Labour Organization, Columbia University and The South Centre*. 2015 Available at <https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53192>; Gentilini, U., et al (2020). Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures. "Living paper" version 13 (September 18, 2020) [online] Available at <http://documents1.worldbank.org/curated/en/295321600473897712/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-September-18-2020.pdf>
- 18 Dasgupta, Sharoda, et al. "Association Between Social Vulnerability and a County's Risk for Becoming a COVID-19 Hotspot — United States, June 1–July 25, 2020." *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, vol. 69, no. 42, 2020, pp. 1535–41. *Crossref*, doi:10.15585/mmwr.mm6942a3; Klugman, Jennifer, et al. "COVID-19 Has a Postcode: - Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies." *Medium*, 7 May 2020, medium.com/sdg16plus/covid-19-has-a-postcode-70d62e91b8fe.
- 19 IMF. "World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent." 30 Sept. 2020, www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020#Full%20Report%20and%20Executive%20Summary; United Nations. "New Generation of Social Protection, Circular Economies Can Shape Inclusive COVID-19 Recovery, Deputy Secretary-General Says at Jobs Summit | Meetings Coverage and Press Releases." *United Nations*, 20 Oct. 2020, www.un.org/press/en/2020/dsgsm1490.doc.htm
- 20 United Nations, "Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond", August 2020, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

- 21 Grasso, Daniele, et al. "Covid de ricos, covid de pobres: las restricciones de la segunda ola exponen las desigualdades de Madrid." *EL PAIS*, 17 Sept. 2020, elpais.com/espana/madrid/2020-09-16/covid-de-ricos-covid-de-pobres-las-restricciones-de-la-segunda-ola-exponen-las-desigualdades-de-madrid.html.
- 22 Séveno, Victoria. "Dutch Minister of Justice Keeps Job Following Wedding Photos Scandal." *IamExpat*, 3 Sept. 2020, www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/dutch-minister-justice-keeps-job-following-wedding-photos-scandal.
& Gallagher, James. "Coronavirus: Prof Neil Ferguson Quits Government Role after 'undermining' Lockdown." *BBC News*, 6 May 2020, www.bbc.com/news/uk-politics-52553229.
- 23 Lakner, Christoph, et al. "Updated Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty: Looking Back at 2020 and the Outlook for 2021." *World Bank Blogs*, 11 Jan. 2021, blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-outlook-2021.
- 24 IMF. "World Economic Outlook, April 2021: Managing Divergent Recoveries." 23 Mar. 2021, www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021.
- 25 Center on Budget and Policy Priorities. "Tracking the COVID-19 Recession's Effects on Food, Housing, and Employment Hardships." *Center on Budget and Policy Priorities*, 16 June 2021, www.cbpp.org/research/poverty-and-inequality/tracking-the-covid-19-recessions-effects-on-food-housing.
- 26 #CovidUnder19, "Children's Rights during Coronavirus: Children's Views and Experiences – Thematic Summaries", September 2020, https://www.tdh.ch/sites/default/files/covidunder19_thematic_summaries_english_20210423_0.pdf
- 27 European Commission. "International Women's Day 2021: COVID-19 Pandemic Is a Major Challenge for Gender Equality." *European Commission - European Commission*, 5 May 2021, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1011.
- 28 ACLED, "COVID-19 Disorder Tracker 2 Aug-8 Aug 2020", August 2020; <https://acleddata.com/analysis/covid-19-disorder-tracker/> and ACLED, "A Year of COVID-19: The Pandemic's Impact on Global Conflict and Demonstration Trends", April 2021, <https://acleddata.com/2021/04/01/a-year-of-covid-19-the-pandemics-impact-on-global-conflict-and-demonstration-trends/>
- 29 ACLED, "A Year of COVID-19: The Pandemic's Impact on Global Conflict and Demonstration Trends", April 2021; <https://acleddata.com/2021/04/01/a-year-of-covid-19-the-pandemics-impact-on-global-conflict-and-demonstration-trends/>
- 30 ACLED, "A Year of COVID-19: The Pandemic's Impact on Global Conflict and Demonstration Trends", April 2021; <https://acleddata.com/2021/04/01/a-year-of-covid-19-the-pandemics-impact-on-global-conflict-and-demonstration-trends/>
- 31 S Cliffe et al. "Are we Facing a Wave of Conflict in High-income Countries." *Center on International Cooperation*. February 2021. https://cic.nyu.edu/sites/default/files/center_on_international_cooperation_-_are_we_facing_a_wave_of_conflict_in_high-income_countries_-_february_2021_final_0.pdf
- 32 Human Rights Watch. "Bangladesh: Arrest of Journalist Investigating Corruption." *Human Rights Watch*, 20 May 2021, www.hrw.org/news/2021/05/20/bangladesh-arrest-journalist-investigating-corruption.
- 33 Harrison, Emma. "Matt Hancock Quits as Health Secretary after Breaking Social Distance Guidance." *BBC News*, 27 June 2021, www.bbc.com/news/uk-57625508.
- 34 Ombudsman of Malawi, "Misplaced priorities, report of the ombudsman of Malawi", November 2020, https://www.theioi.org/downloads/640lj/Malawi_OM_Special%20Report_Misplaced%20Priorities.pdf
- 35 "5 Die in Police Firing at Banshkhali Coal Plant." *Dhaka Tribune*, 17 Apr. 2021, www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/04/17/several-dead-in-police-worker-clash-in-chittagong-banshkhali-power-plant
- 36 BBC News. "Why Colombia's Protests Are Unlikely to Fizzle Out." *BBC News*, 31 May 2021, www.bbc.com/news/world-latin-america-56986821.
- 37 Guardian. "'More People Could Die': Four Killed in Colombia Protests as Talks with Government Stall." *The Guardian*, 29 May 2021, www.theguardian.com/world/2021/may/29/more-people-could-die-four-killed-in-colombia-protests-as-talks-with-government-stall.
- 38 Mubarik, Abu. "EndSARS Demonstration Has Cost Nigeria's Economy \$1.8bn in the Last 12 Days." *Face2Face Africa*, 21 Oct. 2020, face2faceafrica.com/article/endsars-demonstration-has-cost-nigerias-economy-1-8bn-in-the-last-12-days.
- 39 United Nations; World Bank. "Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict." *World Bank*, 2018 <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337>
- 40 Steven D and Williams M. Governance and COVID-19: A background paper for the 2021 SDG16 Conference. *Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies*. March 2021; Williams, Rhodri. "Civil Society as a Critical Partner: Rule of Law and Accountability in the Liberian COVID-19 Response, Part II | FBA-bloggen." *FBA bloggen*, 15 Feb. 2021, www.fba-bloggen.se/2021/02/15/civil-society-as-a-critical-partner-rule-of-law-and-accountability-in-the-liberian-covid-19-response-part-ii.
- 41 Task Force on Justice. "Justice for All – Final Report." *Center on International Cooperation*, 2019, <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 42 de Langen, Maaike "Justice at the Heart of the Social Contract - Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies." *Medium*, 17 Apr. 2021, medium.com/sdg16plus/justice-at-the-heart-of-the-social-contract-f3a5056b6f62.
- 43 Open Government Partnership. "Justice." *Open Government Partnership*, 6 May 2021, www.opengovpartnership.org/policy-area/justice.
- 44 "Pathfinders for Justice | Virtual Ministerial Meeting.", 2021, www.justice.sdg16.plus/ministerial.
- 45 Pathfinders for Peaceful Just and Inclusive Societies. The South African Statisticians Advancing Access to Civil Justice. *Medium*. 17 February 2021. <https://medium.com/sdg16plus/the-south-african-statisticians-advancing-access-to-civil-justice-8793eba44e58>
- 46 Todak, Natalie, and Lois James. "A Systematic Social Observation Study of Police De-Escalation Tactics." *Police Quarterly*, vol. 21, no. 4, 2018, pp. 509–43. *Crossref*, doi:10.1177/1098611118784007.

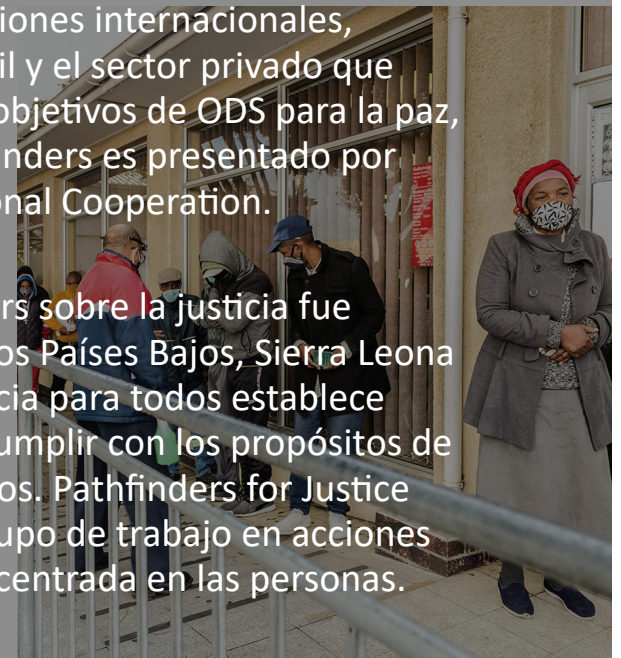
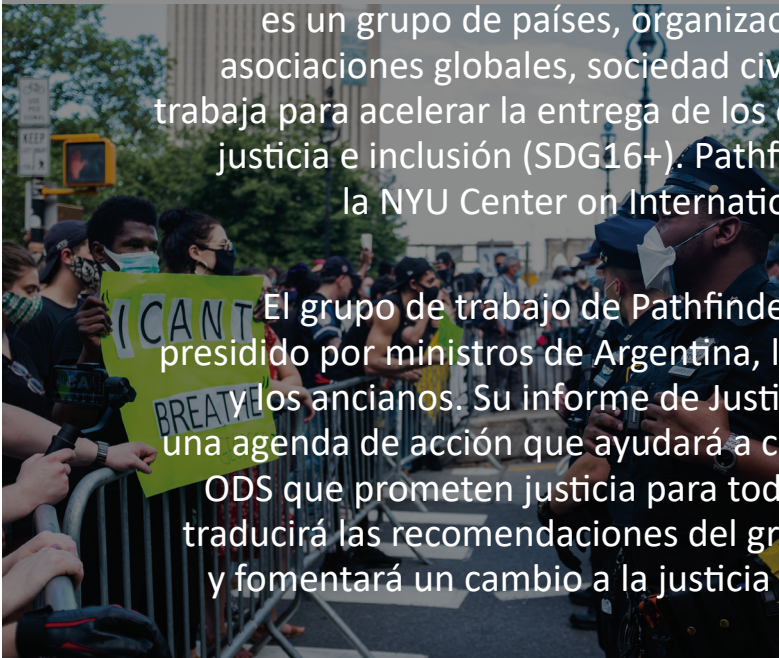
- 47 Corder, and van Zyl Smit. "Securing Judicial Independence." *Siber Ink*, 2017.
- 48 di Puppò, Lili "Police reform in Georgia - Cracks in an anti-corruption success story," *U4 Practice Insight* 2010:2; <https://www.u4.no/publications/police-reform-in-georgia-cracks-in-an-anti-corruption-success-story.pdf>
- 49 Pathfinders for Peaceful, Just & Inclusive Societies. "How Harnessing the Power of the Media Achieved a Justice Transformation." *Medium*, 30 Jan. 2020, medium.com/sdg16plus/champions-of-change-how-harnessing-the-power-of-the-media-achieved-a-justice-transformation-d8e8edb23319.
- 50 UNDP. "Journey To Extremism In Africa – Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment." *Journey to Extremism*, 2017, journey-to-extremism.undp.org/en.
- 51 Schlein, Lisa, et al. "Protesters Demand Justice on Second Anniversary of Deadly Crackdown." *Voice of America*, 7 June 2021, www.voanews.com/africa/south-sudan-focus/protesters-demand-justice-second-anniversary-deadly-crackdown.
- 52 Simpson, Graeme. "'From the Normative to the Transformative': Defining and Promoting Justice and Human Rights as Part of Violent Conflict Prevention and Peacebuilding," *Journal of Human Rights Practice*, 9, 2017, 379–400 doi: 10.1093/jhuman/hux030, 2017.
- 53 Task Force on Justice, Justice for All – Final Report. (New York: Center on International Cooperation, 2019), available at <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 54 Steffek, Felix, and Hannes Unberath. *Regulating Dispute Resolution: ADR and Access to Justice at the Crossroads*. 1st ed., Hart Publishing, 2014.
- 55 Norwegian Refugee Council (2020): An Unnecessary Burden: Forced Evictions and COVID-19. Briefing Note, July.
- 56 Pathfinders for Peaceful, Just & Inclusive Societies. "The Advocates with a Simple Message: 'Poverty Is Not a Crime.'" *Champions of Change*, 15 May 2020, medium.com/sdg16plus/the-advocates-with-a-simple-message-poverty-is-not-a-crime-b570bd541dbb.
- 57 United Nations; World Bank. "Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict." World Bank, 2018 <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337>
- 58 Maru, Vivek. *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. Cambridge University Press, 2018; Legal Empowerment Network, et al. "Gender Justice During and Beyond the COVID-19 Crisis: Institutional Responses to Gender-Based Violence and the Role of Legal Empowerment Groups." *Namati*, 15 June 2021, namati.org/resources/gender-justice-during-and-beyond-covid19-crisis-en.
- 59 "How Social Movements Can Use Virtual Worlds." *Science Daily*, July 2019, www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190710193913.htm.; Lucero, Leanna. "Safe Spaces in Online Places: Social Media and LGBTQ Youth." *Multicultural Education Review*, vol. 9, no. 2, 2017, pp. 117–28. *Crossref*, doi:10.1080/2005615x.2017.1313482.
- 60 Clause Inc, "LegalZoom to Offer Smart Legal Contracts With Clause," PRNewswire, September 17, 2018; accessed 9 June 2021, <https://www.prnewswire.com/news-releases/legalzoom-to-offer-smart-legal-contracts-with-clause-300713717.html>
- 61 See, for example: "Technology Solutions – Sauti East Africa." *Sauti East Africa*, sautiafrica.org/services-products/technology-solutions. Accessed 1 July 2021.
- 62 Legal Empowerment Network, et al. "Gender Justice During and Beyond the COVID-19 Crisis: Institutional Responses to Gender-Based Violence and the Role of Legal Empowerment Groups." *Namati*, 15 June 2021, namati.org/resources/gender-justice-during-and-beyond-covid19-crisis-en.
- 63 Task Force on Justice, Hiil. "Innovating Justice: Needed and Possible. Report of the Innovation Working Group." *Center on International Cooperation*. 2019. <https://www.hiil.org/news/innovating-justice-needed-and-possible-report-of-the-innovation-working-group-of-the-task-force-on-justice/>
- 64 Task Force on Justice. "Justice for All – Final Report." *Center on International Cooperation*, 2019, <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 65 Pathfinders for Peaceful, Just & Inclusive Societies. "The Mediators Promoting Justice for All in Nigerian Courts." *Champions of Change*, 30 Jan. 2020, medium.com/sdg16plus/the-mediators-promoting-justice-for-all-in-nigerian-courts-106b4a02f796.
- 66 Odendaal, Andreis "An Architecture for Building Peace at the Local Level: A Comparative Study of Local Peace Committees," UNDP, December 2010, https://www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/pdfs/UNDP_Local%20Peace%20Committees_2011.pdf
- 67 "Fundamental Rights and Non-Discrimination." *World Justice Project*, 2021, worldjusticeproject.org/world-justice-challenge-2021/fundamental-rights-and-non-discrimination. "Justice Needs and Satisfaction of Refugees and Host Communities: Somali and Tigray Regions of Ethiopia." *Hiil*, 2020. <https://www.hiil.org/projects/justice-needs-and-satisfaction-of-refugees-in-ethiopia/>
- 68 F Carbonari et al (2020): A Review of the Evidence and a Global Strategy for Violence Prevention. Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies. Available at <https://www.sdg16hub.org/content/pathfinders-review-evidence-and-global-strategy-violence-prevention>; Alves, Márcia C., and Enrique Desmond Arias. "Understanding TheFica Vivoprogramme: Two-Tiered Community Policing in Belo Horizonte, Brazil." *Policing and Society*, vol. 22, no. 1, 2012, pp. 101–13. *Crossref*, doi:10.1080/10439463.2011.597857; Steven, D and Sucuoglu, G "What works in conflict prevention?" NYU Center on International Cooperation, March 2017; "Delivering Justice in the COVID-19 Crisis: Solutions and Interventions." *Hiil*, 2021. <https://dashboard.hiil.org/covid19-solutions-and-interventions/>
- 69 The Associated Press. "Evanston, Illinois, Becomes First U.S. City to Pay Reparations to Black Residents." *NBC News*, 23 Mar. 2021, www.nbcnews.com/news/us-news/evanston-illinois-becomes-first-u-s-city-pay-reparations-blacks-n1261791.
- 70 Nikole Nelson Champions of Change interview: <https://medium.com/sdg16plus/how-native-health-partners-ensure-justice-for-people-in-alaska-48491c418535>
- 71 Task Force on Justice. "Justice for All – Final Report." *Center on International Cooperation*, 2019, <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 72 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies. "The Bangladeshi Judge Who Protected People in the Justice System from COVID-19." *Medium*, 8 Sept. 2020, medium.com/sdg16plus/the-bangladeshi-judge-who-protected-people-in-the-justice-system-from-covid-19-7a81cda471a2.
- 73 Steven D and Williams M. Governance and COVID-19: A background paper for the 2021 SDG16 Conference. *Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies*. March 2021

- 74 Phillips, Ben. *How to Fight Inequality: (And Why That Fight Needs You)*. 1st ed., Polity, 2020.
- 75 Steven D and Williams M. *Governance and COVID-19: A background paper for the 2021 SDG16 Conference. Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies*. March 2021
- 76 Task Force on Justice. "Justice for All – Final Report." *Center on International Cooperation*, 2019, <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 77 Kayani D and Rafi F. *Pakistan Votes*. National Database and Registration Authority (NADRA). 2013.
- 78 Yu, Xiaoqing. "Social Protection Tools for the 21st Century – ISPA." *ISPA*, 12 Sept. 2017, ispatools.org/blog/about-ipsa.
- 79 Mahmoud, Mustafa. "Stopping the Digital ID Register in Kenya – A Stand Against Discrimination." *Namati*, 29 Apr. 2019, namati.org/news-stories/stopping-the-digital-id-register-in-kenya-a-stand-against-discrimination.
- 80 Benhassine N et al. "Finding a Path to Formalization in Benin - Early Results after the Introduction of the Entrepreneurial Legal Status," *World Bank Policy Research Working Paper 7510*. 2015: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23472/Finding0a0path0prenant0legal0status.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- 81 Task Force on Justice. "Justice for All – Final Report." *Center on International Cooperation*, 2019, <https://www.justice.sdg16.plus/>
- 82 High-level Group on Justice for Women. *Justice for Women - High-level Group Report. UN Women, IDLO, World Bank and Task Force on Justice*. 2019; World Bank, "Why Secure Land Rights Matter," March 24, 2017 - <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/24/why-secure-land-rights-matter>
- 83 Williamson, Claudia R. / 2017. "Praise for Property." *The Journal of Private Enterprise*, 32(4): 83-94. Acemoglu, Daron, and Simon H. Johnson. "Unbundling Institutions." *SSRN Electronic Journal*, 2004. *Crossref*, doi:10.2139/ssrn.442900.
- 84 Hiil. "Strategy Document: Civil Justice Transformation in Ogun State." *Hiil*, 2021. <https://www.hiil.org/news/ogun-state-announces-civil-justice-transformation-strategy/>
- 85 Ayalew Ali D, et al, "Empowering Women through Land Tenure Regularization: Evidence from the Impact Evaluation of the National Program in Rwanda (English)," Development research group case study. *World Bank*. 2015.
- 86 Steven D and Williams M. *Governance and COVID-19: A background paper for the 2021 SDG16 Conference. Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies*. March 2021
- 87 Human Rights Watch. "Bangladesh: Writer Dies After 9 Months in Custody." *Human Rights Watch*, 26 Feb. 2021, www.hrw.org/news/2021/02/26/bangladesh-writer-dies-after-9-months-custody.
- 88 Open Government Partnership. "Briefing Sessions - Leading the Fight Against Corruption: UNGASS and Beyond." *Open Government Partnership*, 4 Mar. 2021, www.opengovpartnership.org/events/briefing-sessions-leading-the-fight-against-corruption-ungass-and-beyond.
- 89 Hübscher, E., T. Sattler and M. Wagner. Does Austerity Cause Polarization? *SSRN Electronic Journal*. 2020.. https://www.researchgate.net/publication/339989405_Does_Austerity_Cause_Polarization
- 90 World Economic Forum. "The COVID-19 crisis has revitalized the social contract. For how long?." *World Economic Forum*, 13 Jan. 2021, www.weforum.org/agenda/2021/01/the-covid-19-crisis-has-revitalized-the-social-contract-for-how-long.
- 91 Anonymous: The Secret Barrister: Stories of the Law and How It's Broken. *MacMillan*. 2018. Thompson, Barney. "Justice for All? Inside the Legal Aid Crisis." *Financial Times*, 27 Sept. 2018, www.ft.com/content/894b8174-c120-11e8-8d55-54197280d3f7.
- 92 Worley, William. "Tracking the UK's Controversial Aid Cuts." *Devex*, June 2021, www.devex.com/news/tracking-the-uk-s-controversial-aid-cuts-99883.
- 93 Amnesty International. *Cuts That Hurt: The Impact of Legal Aid Cuts in England on Access to Justice*. Amnesty International, 2016.; Manuel M and Manuel C. "People-Centred Justice for All: A Route to Scaling up Access to Justice Advice and Assistance in Low-Income Countries." *Odi Org*, 13 Apr. 2021, odi.org/en/publications/people-centred-justice-for-all.



El Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies

es un grupo de países, organizaciones internacionales, asociaciones globales, sociedad civil y el sector privado que trabaja para acelerar la entrega de los objetivos de ODS para la paz, justicia e inclusión (SDG16+). Pathfinders es presentado por la NYU Center on International Cooperation.



El grupo de trabajo de Pathfinders sobre la justicia fue presidido por ministros de Argentina, los Países Bajos, Sierra Leona y los ancianos. Su informe de Justicia para todos establece una agenda de acción que ayudará a cumplir con los propósitos de ODS que prometen justicia para todos. Pathfinders for Justice traducirá las recomendaciones del grupo de trabajo en acciones y fomentará un cambio a la justicia centrada en las personas.

<https://www.justice.sdg16.plus/>



PATHFINDERS
FOR PEACEFUL, JUST AND INCLUSIVE SOCIETIES